

COMUNALES Y PROPIOS EN VALENCIA

Mariano Peset Reig
Pilar Hernando Serra
Universidad de Valencia

SUMARIO: I. EN BUSCA DE FUENTES.—II. BIENES COMUNALES.—III. LOS BIENES DE PROPIOS.—IV. REGLAMENTOS DE OTRAS CIUDADES.—V. EXPEDIENTES DE DESAMORTIZACIÓN.—

I. EN BUSCA DE FUENTES

No existen apenas estudios sobre bienes comunales y de propios en el reino de Valencia durante los siglos XVIII y XIX¹; por tanto, es menester acudir a las fuentes, que presentan también notables dificultades... Nuestra intención es hacer un planteamiento previo, para que en el futuro se disponga de un marco jurídico, de unas líneas indispensables antes de abordar cualquier investigación: un estado de las fuentes y las cuestiones más generales sobre los bienes comunales.

¹ Sobre la ciudad de Valencia, se ocupó en su tesis de doctorado, V. GIMÉNEZ CHORNET, *Política económica i hisenda municipal de la ciutat de València en el segle XVIII*, Valencia, 1995; también Pilar HERNANDO SERRA, *El ayuntamiento de Valencia a principios del siglo XIX. Tres modelos de organización. 1800-1814*, tesis de doctorado, Valencia, 2000. En general, quienes han investigado Valencia u otros ayuntamientos del reino, no entran en bienes colectivos, sin duda por su dificultad, a diferencia de los estudios sobre municipios castellanos, como Salamanca por Javier INFANTE o Madrid por Manuel MARTÍNEZ NEIRA. Hay sólo algunas aportaciones de interés: J. SERRANO JAÉN, «Las tierras saladares de Elche: una apropiación municipal de una extensión comunal», *Estudis*, 7 (1987), 261-280; J. AZAGRA, «Notas acerca de la desamortización de propios y comunes en la provincia de Valencia y su contexto histórico (1854-1855)», *Anales valentinos*, 3, 6 (1977), 377-408; F. TORRES FAUS, «Un plet per la propietat de les terres comunals de la devesa de Vallivana en el segle XVIII», *Miscelánea homenaje a José María Doñate*, Villarreal, 1993, págs. 331-350; D. BERNABÉ, «Bienes rústicos de aprovechamiento público en la Valencia moderna», *Studia historica. Historia moderna*, 16 (1997), 129-151; C. MONTIEL MOLINA, «Los bienes comunales en los Países catalans durante la época contemporánea», *Béns comunals als Països catalans i a l'Europa contemporània*, Lérida, 1996, págs. 267-303; también sus documentados libros que se citan en notas posteriores. E. BELENGUER y otros (eds.), *Els béns comunal's a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII)*, Barcelona, 1998. Sobre Castilla existen, en cambio, numerosos estudios, desde el libro de Alejandro NIETO, a la reciente síntesis de José Ignacio FORTEA en el primer coloquio de Salamanca sobre la propiedad, págs. 63-111.

Es evidente que no bastan las fuentes legales: si acudimos a los cuerpos forales —anteriores a la nueva planta castellana— apenas encontramos referencias a bienes colectivos de los pueblos, tan frecuentes en el antiguo régimen, y que fueron privatizados, en su mayor parte, por la desamortización de Madoz de 1855. Existe una fuente esencial para conocer comunales y propios en la península, que desgraciadamente no se realizó sobre Valencia: el catastro de Ensenada. Para el estudio de la distribución de la tierra en las comarcas del reino hay que utilizar los libros de peyta en la época foral² o los repartos de equivalente, a partir del XVIII. Pero en éstos no figuran los bienes comunales —aunque sí los propios— por estar exentos de estos repartos³. Aunque conocemos el estado financiero de los pueblos a través de una relación inédita, que puede fecharse hacia 1740 —de la intendencia, posiblemente—, ésta no puede ser utilizada. Recoge vecinos y rentas públicas y de particulares, pero no comprende comunales, porque no producen rentas, sino tan sólo los propios; éstos, además, aparecen unidos con arbitrios, por tanto no se pueden deslindar; aparte trae las rentas del clero. Una magnífica estadística en tiempos preestadísticos, pero, que no nos sirve en esta ocasión⁴.

Dadas estas circunstancias, en nuestra búsqueda de comunales y propios hemos consultado otros tres bloques de fuentes, que describimos con brevedad:

1. De forma general, el estudio de los documentos de un archivo municipal en el XVIII nos ha servido para descubrir los rastros que han dejado, en las distintas series, los bienes comunales. Hemos trabajado dos, Valencia y Orihuela. Desde ahora advertimos que, al no producir ingresos, los comunales en sentido estricto apenas aparecen.
2. Reglamentos de bienes de propios y arbitrios de varias poblaciones, donde —es evidente— tampoco figuran los comunales... En cambio, son de gran interés respecto de los propios en Valencia y otras ciudades, que muestran diferencias notables con el mundo castellano...

² T. PERIS ALBENTOSA, *Regadío, producción y poder en la Ribera del Xúquer. La Acequia real de Alzira*, Valencia, 1992.

³ P. GARCÍA TROBAT, *El equivalente de alcabalas, un nuevo impuesto en el reino de Valencia durante el XVIII*, Valencia, 1999, pág. 67 sobre los propios en los libros padrón; ni siquiera recogen bienes de eclesiásticos, que están exentos.

⁴ Archivo municipal de Valencia, *Hacienda*, caja número 1.843. Esta estadística fue confeccionada por el intendente a partir de unos manifiestos presentados por todos los pueblos de cada una de las gobernaciones del reino hacia 1734. El documento recoge los mismos datos que otro posterior conservado en el archivo histórico nacional transcrito y recogido por J. PALAO GIL, en su excelente tesis de doctorado, *La amortización eclesiástica en la ciudad de Valencia en el siglo XVIII: el juzgado de amortización*, 2 vols., Valencia, 1992, II, págs. 882-884. Se ha publicado en su libro *La propiedad eclesiástica y el juzgado de amortización en Valencia (siglos XVI a XIX)*, Valencia, 2001, págs. 296-298; el análisis del documento y del informe adjunto, obra de un oidor de la audiencia de Valencia, en págs. 132-134.

3. Documentación y estadística de la etapa liberal, en que se destruyen las propiedades colectivas, mediante su atribución al estado o a los pueblos, y su desamortización. Advertimos ya que la estadística, en general, mezcla bienes de muy diversa titulación, por lo que no resulta fácil distinguir desde los números si se trata de bienes de la corona, comunales de los pueblos o propios, mostrencos⁵. Por otro lado, en el proceso antiseñorial y desamortizador se produce una lucha por los títulos de propiedad, que hemos de analizar con cuidado, ya que en el antiguo régimen existen varias propiedades sobre un mismo objeto, como es sabido. Los señores defienden los títulos de sus señoríos, mientras los pueblos sus aprovechamientos colectivos —algo semejante ocurre con los dos dominios, directo y útil, en la enfiteusis—.

En la legislación foral de Valencia no se encuentra esta división de bienes comunales y de propios, ya que se utilizan otras instituciones o mecanismos jurídicos para atender las finalidades que éstos tenían. Cuando en el XVIII se introduce con el derecho castellano la distinción, su adaptación es peculiar y distinta a los municipios de Castilla y Andalucía...

II. BIENES COMUNALES

La ciudad de Valencia no tenía comunales, montes o pastos, ya que su término estaba densamente poblado desde los años de la conquista. Mientras en Andalucía —conquistada por Fernando III— numerosos musulmanes huyen a Granada, en el este peninsular no se produce esa despoblación. Además, las tierras que podían haber desempeñado esta función, se las reservó el monarca Jaime I, dejando que los vecinos de la ciudad pudieran utilizarlas, ya que les permitió llevar sus ganados a pastar o pescar en la dehesa de la Albufera, lago en comunicación con el mar, al sur de la ciudad. Se adoptaron mecanismos jurídicos diferentes al derecho castellano como el *empriu* o concesiones de pastos y otros aprovechamientos sobre tierras del rey y de los señores. Las funciones que cumplen los comunales y propios en Castilla se articulan en el derecho foral de otra manera. Por ejemplo, los pastos necesarios al ganado o las leñas para los vecinos, se generan en Castilla en los ejidos o en dehesas y montes comunales o en los propios. La ciudad de Valencia no se dota de pastos, pero un privilegio temprano de Jaime I

⁵ A. LÓPEZ ESTUDILLO, «Los montes públicos y las diversas vías de su privatización en el siglo XIX». *Agricultura y sociedad*, 65 (octubre-diciembre, 1992), 65-89; A. PONS, *La propietat a subhasta. La desamortització i el seus beneficiaris: inversió i mercat (València, 1855-1867)*. Valencia, 1991: elimina el problema calificando a todos de bienes del estado.

concede que puedan apacentar sus ganados en todo el reino, lo que será confirmado por sucesivos monarcas ⁶.

El *empriu* o *ademprivium* es una institución que procede del derecho catalán medieval. El monarca y los señores, los monasterios, permitían los aprovechamientos de prados y bosques a los campesinos asentados en sus tierras. Podían pacer sus ganados y cebar sus cerdos con las bellotas, pescar y cazar, cortar madera para sus casas, leñas... Algunas comunidades adquirieron tierras comunales por compra o donación, pero más usual es el *empriu*, los aprovechamientos comunales, una especie de propiedad o servidumbre a favor de los campesinos ⁷. En cierto modo, al igual que en el establecimiento enfiteútico, los poderosos son señores de las tierras, pero establecen una propiedad campesina, que es el dominio útil y el aprovechamiento de montes y pastos. De manera que los reyes, señores y monasterios cuando adquieren una aldea o unas tierras establecen campesinos con censos enfiteúticos, o bien en tierras francas o arrendadas, con derecho a aprovechar las aguas, hierbas y leñas de los montes. En algunos casos, es posible que las colectividades logren adquirir por donación o compra algunas dehesas o montes, pero el régimen general es el *empriu*... En todo caso, tampoco es frecuente que los municipios disfruten de tierras de cultivo o propios, arrendadas cada año, como aparecen en Castilla...

Jaime I —tras la conquista— concedió a la ciudad de Valencia, por privilegio de 1239, el derecho de *empriu* sobre todos los pastos del reino, incluso sobre tierras de señores y eclesiásticos, como también lo haría a otras poblaciones sobre su término o con más amplitud. «Atorgan quels pobladors de la ciutat del terme de València hagen pastures franques e liures pels tèrmens de les viles dels cavallers, e dels clergues, e dels religiosos d'era en era» ⁸. La jurisdicción correspondería a los jurados y justicias, a quienes se la concedió

⁶ *Aureum opus privilegiorum regaliū civitatis et regni Valentie*, editado por Luis Alanya, Valencia, 1515 —ediciones facsímiles 1972 y 1999—, privilegio 9 de Jaime I, de 1239, págs. 64-65; *Fori regni Valentiae*, edición de Francisco Juan Pastor, Valencia, 1547-1548, libro 1, rúbrica 2, fuero 1 —edición crítica de los *Furs* de Germà Colom y Arcadio García—.

⁷ E. DE HINOJOSA, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la edad media*, Madrid, 1905, págs. 49-56.

⁸ *Fori regni Valentiae*, 1. 2, 1, también fueros 3 y 7; Carlos V, fuero 5, prohibió pastar en las huertas. Los privilegios 9 y 8 vedan a los señores y eclesiásticos adhestrar sus tierras, aunque permiten establecer boalares; por el privilegio 4, Pedro IV le concedió la mitad del cauce del río, *Aureum opus*..., págs. 61-63 y 249. También a los vecinos de la villa de Morella, aldeas y lugares de su término se les concedió franqueza de *emprius* y herbajes en el principado de Cataluña y Tortosa, cuya confirmación se solicitó en las cortes de 1604. *Furs, capitols, provisions e actes de cort, fets y atorgats per la S. C. R. M. del rey don Phelip nostre senyor, ara gloriosament regnant*, Valencia, 1604, cap. 188, fol. 38v. Véanse los privilegios 28 y 20 de Pedro III, a otras ciudades, *Aureum opus*..., págs. 130, 125.

el monarca, y confirmó Martín el humano en 1403⁹. MATHEU y SANZ le dedicará algunas páginas a este privilegio, en las que, desde una concepción romana, califica el *empriu* como servidumbre general de pastos a favor de la universidad o colectivo —no percibe ya la dualidad de derechos dominicales diversos, que existían desde una perspectiva medieval—. Señala que además de pastos, tenían derecho a aprovechar las aguas, saca de leña, cortar piedras, cocer cal, recoger arena y otros materiales para edificar. Por tanto, cubría este privilegio funciones que en Castilla desempeñaban los comunales, las dehesas, el ejido... «La razón de esta libre y franca concesión de pastos generales a la ciudad de Valencia —escribió MATHEU— se debe, a mi juicio, porque abundan en número sus habitantes y ciudadanos y el comercio de gentes forasteras, pues tiene necesidad de muchos alimentos, así como de carnes para sacrificar. Situada a orillas del mar, con lugares de riego y amenísimos, menos aptos para pastizales que para árboles, de cuyas frondas se nutren los gusanos de seda, y para otros frutos. Se cultivan feraces viñas, más que las hierbas que después de las cosechas nacen espontáneamente. En su término no hay campos vacíos de sembradura, ni existen prados, ni bosques destinados al pastoreo...»¹⁰. En la ciudad de Valencia nos encontramos ante tierras muy pobladas, de moros que permanecen tras la conquista, de huertas cultivadas, que dejan poco espacio para dehesas y comunales, para tierras concedidas en forma colectiva a los cristianos que vienen a poblar, de ahí que se le conceda el *empriu* en los demás pastos del reino...

La Albufera se conservó en el real patrimonio, si bien se concedieron, asimismo, derechos de pasto y de pesca a favor de los habitantes de la ciudad de Valencia, con pago de algunas cantidades. De este modo cumplía fines colectivos, pero la titularidad, como la de los vastos territorios en *empriu*, no era de la ciudad, o podíamos decir que estaba compartida¹¹.

⁹ *Fori regni Valentiae*, 1, 2, 9. Eran los jurados del gobierno municipal de Valencia los que tenían la jurisdicción exclusiva en los conflictos que se entablaran por los *emprius*. T. Cerdán de Tallada, *Repartimiento sumario de la jurisdicción de su magestad en el reyno de Valencia*, Valencia, s. f., reimpreso en Valencia en 1801.

¹⁰ L. Matheu y Sanz, *Tractatus de regimine Regni Valentiae*, Lyon, 1704 —primera edición, Valencia, 1654—, págs. 143-157, cita en 144; dedica amplio espacio a la vecindad, que da derecho a estos usos; N. Bas y Galcerán, *Theatrum iurisprudentiae*, 2 vols., Valencia, 1690. I, capítulo XIII, págs. 219-223, incluso siguientes, plantea la distinción en bienes públicos y su enajenación, desde un enfoque del derecho común, sin entrar apenas en las particularidades de Valencia.

¹¹ Privilegio 36, de 1250, sobre la dehesa de peces de la Albufera y privilegio 21 de Pedro III, 1283, *Aureum opus*..., págs. 84-85, 125-126; *Fori Valentiae in extravagantia*, 84. Sobre la Albufera, C. García Monerris, *Rey y señor. Estudio de un realengo del país valenciano (La Albufera, 1761-1836)*, Valencia, 1985; sobre real patrimonio, J. Correa, *La hacienda foral valenciana. El real patrimonio en el siglo XVII*, Valencia, 1995. En relación a las aguas, el monarca hizo donación de las acequias a comunidades de propietarios y regantes, remitimos a T. F. Glick, *Regadío y sociedad en la Valencia medieval*, Valencia, 1988.

En el siglo XVIII, cuando se impone la distinción entre comunales y propios, el ayuntamiento de Valencia se encuentra con una regulación nueva, ajena a sus fueros y costumbres. Considerará, sin duda, comunales aquellos bienes que disfrutaban todos y no producen rentas, y, en consecuencia, no se registrarán apenas en su documentación, a diferencia de los propios y arbitrios.

Valencia capital no los tenía, sino que disfrutaba de *empriu* en sus herba-
jes y pastos, y de su pesca en la Albufera, de la concesión de aguas a comu-
nidades de regantes y a los municipios. Por tanto, cuando se enfrenta a *Par-
tidas* para su determinación, no puede adecuarse por entero a aquella clase de
bienes comunales que aparecían en su precepto: «Son del común de cada una
cibdad o villa. las fuentes e plaças o fazen las ferias e los mercados. E los
lugares o se ayuntan a concejo. e los arenales que son en las riberas de los
ríos. e los otros exidos e las carreras o corren los cavallos, e los montes e las
dehesas, e todos los otros lugares semejantes destos que son establecidos e
otorgados para pro comunal de cada cibdad o villa o castillo o otro lugar. Ca
todo ome que fuere y morador. puede usar de todas estas cosas sobredichas:
e son comunales a todos, también a los pobres como a los ricos...» (3, 28, 9).

En alguna ocasión realiza un inventario de su patrimonio que, en cierto
modo, serían sus comunales¹². Apenas se asemeja a lo que señalaba el texto
alfonsí —por la tradición del *empriu* para sus usos y pastos, ni la Albufera, ni
las aguas eran suyas, sólo su aprovechamiento—. En sus primeros cinco
apartados se recogen elementos que coinciden con *Partidas*, pero en los
demás no.

1. Casas consistoriales y casa vestuario, que se reedifica a fines del
XVIII, y se conserva, delante de la catedral, era casa del portero y
para las fiestas.
2. Calles, plazas, caminos... El camino del Grao y su bastión. Murallas
y puertas. Junta de *murs* y *valls*, cloacas y caminos¹³. Las cruces
divisorias del término de la ciudad.
3. Fuentes, una de agua dulce en el Grao, y la del patio de la Lonja de
mercaderes.

¹² V. GIMÉNEZ CHORNET, *Política econòmica i hisenda municipal...*, págs. 217-232; P. HER-
NANDO SERRA, *El ayuntamiento de Valencia a principios del siglo XIX...*, págs. 271-274, y apén-
dice número 13, págs. 811-812.

¹³ J. LOP, *De la institució, govern polítich y jurídich, costums y observàncies de la fàbrica
vella, dita de murs e valls, y nova dita del riu*, Valencia, 1675, expuso la administración de este
organismo foral; un estudio reciente, V. MELIÓ URIBE, *La «junta de murs i valls»*, *Historia de las
obras públicas en la Valencia del antiguo régimen, siglos XIV-XVIII*, Valencia, 1991.

4. Marjales de Ruzafa, pantanosos, concedidos por Pedro IV en 1386. Con establecimientos hasta 1707. ahora dejados como pastos.
5. Vivero de árboles en el río, por orden de 1749. para repoblar.
6. Prisiones de San Narcís, Serranos. Galera para mujeres.
7. Edificios destinados a funciones públicas municipales, cuyas rentas, después se consideran de propios. Son, el *almodí*, peso de la harina, silos de Burjasot —que todavía existen—; carnes —matadero o *escorxador de moltons* y *triador de ramats*—; además, donde se vende el género, las carnicerías y pescaderías; juzgado del repeso —antiguo mustazaf—. Peso de la paja y algarrobos.

La lonja de vituallas, que se vendió en 1739.

La lonja de mercaderes, hermoso edificio gótico, cuartel, y después en 1762 *consolat del mar*.

Horno plaza del picadero, para cuartel de tropas.

8. Relacionados con la peste de 1648 aparece la casa del morbero del Grao, el lazareto, el cementerio... Casa de carros para recoger ropas y muebles en tiempo de peste.
9. Almacén de pólvora, que en 1755 pasa a Benimámet. Almacenes de trigo: la Senia, la Redonda y otros.
10. Casa del relojero del Micalet.
11. Aduanas de las puertas de la ciudad, mandadas construir por el intendente marqués de Malespina en 1744, en Real, Quart, y san Vicente; en Serranos, como es prisión, se ha arrendado local por la parroquia de san Bartolomé.
12. El barranco del Carraixet, donde se sepultaban los ajusticiados.
13. La universidad y la casa del alguacil y del apuntador.
14. Edificios religiosos, como el convento de san Gregorio o casa de arrepentidas; la casa natalicia de san Vicente Ferrer; la capilla de san Vicente mártir, casa de las rocas de la procesión del Corpus.

Hay otros bienes relacionados que son más discutibles, pues la propiedad no parece del ayuntamiento, como puede ser la sala del convento de predicadores, donde se celebran las cortes; la sacristía en donde se guardan los caudales de la *taula de canvis* —banco municipal que desapareció con la nueva planta—. Como también las baronías o lugares sobre los que la ciudad posee jurisdicción y nombra los regidores y oficiales, sin tener ingresos: baronía del Puig, lugares de Altura y Alcublas —cambiado por Chelva—, Puebla de Farnals, Alboraya, Albuixech, Foyos y Masarrojos...

Ni dehesas, ni ejidos, ni montes a que aludían las *Partidas*. Apenas hay más tierras que los marjales de Ruzafa, aunque su patrimonio sea grande. En general, agrupa —aparte de algunos bienes colectivos de uso común— bienes públicos, que usan los empleados y oficiales para sus funciones, o determinadas personas, como la universidad, que por ser de patronato municipal está incluida. *Partidas* refleja una sociedad agraria, antigua, no una gran urbe, más desarrollada y comercial, que requiere instalaciones para cobros de impuestos y vigilancia de los abastos... Santayana sigue a *Partidas* en su enumeración de los bienes comunales: plazas, calles o suelos públicos; montes de encinas, robles y otros árboles; montes blancos o baldíos —aquí cabría una amplia discusión—; dehesas y ejidos, pastos públicos; prohibición de adehesar tierras...; caza y pesca...¹⁴. Pero luego, al hablar de propios se acerca más a las realidades que se descubren en Valencia...

Hemos buscado la existencia de bienes comunales más semejantes a Castilla en otra ciudad del sur, del interior, la agrícola y ganadera Orihuela. Pero la dificultad estriba en encontrar en su archivo la huella de sus amplios pastizales y montes, de sus realengos... Al parecer existían boalares de la ciudad, para los ganados que la abastecían; redondas o dehesas comunales que utilizaban los vecinos —otros meses se arrendaban—, y por último tierras de realengo de libre aprovechamiento, que acabaron por arrendarse¹⁵. Sus nombres, la trashumancia de ovejas y ganado hacia estas tierras se muestra en alguna documentación. Sobre todo, porque como empiezan a pagar elevadas cantidades por los pastos, esas rentas se consideran de propios. Así, en octubre de 1768, en la junta de propios y arbitrios se autoriza a diversas villas para que lleven su ganado a los realengos: Albarracín, Santa María de Cuenca, 900 ovejas, Almoradí, 520 cabras, a seis dineros por cabeza... Lo habían hecho desde tiempo inmemorial, pero ahora ofrecen pagar. Se incrementan los ingresos de propios por hierbas de los realengos y montes, las cortas de árboles... Los celadores o guardas deben vigilar «pastos y árboles, tanto en los realengos del Campo y cuartos de la Redonda, como en la huerta y boalares...»¹⁶. También subastan los pastos sobrantes en Salinas, Torre Mendo, Alcarchofar, Murada, Ramblas y Matança¹⁷.

¹⁴ L. SANTAYANA Y BUSTILLO, *Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos*, edición de F. Tomás y Valiente, Madrid, 1979, págs. 91-99.

¹⁵ J. MILLÁN GARCÍA-VARELA, *Rentistas y campesinos: desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano: 1680-1840*, Alicante, 1984, págs. 215; también J. B. VILAR RAMÍREZ, *Historia de la ciudad de Orihuela*, Orihuela, 1975-1982. Sobre dehesas y boalares en ésta y otras poblaciones D. BERNABÉ, «Bienes rústicos...», págs. 136-138, con la bibliografía existente.

¹⁶ Archivo municipal de Orihuela, *Libros de junta de propios y arbitrios*, D-27, sesiones de 4 y 20 de octubre, 18 y 26 de noviembre y 6 de diciembre de 1768, fols. 6v.-70v., 88r.-92v., 99v.-102r. Albarracín gana real provisión para que sigan en este uso inmemorial. Los vecinos no han de pagar, pregones, D-28 y D-29, plegado, fol. 52r. Sobre ganadería en el reino, J. PIQUERAS HABA, C.

Ya existían pagos por herbajes desde antiguo —sobre la Redonda, que sería municipal—, pero a partir de 1773 se multiplican y aparecen mencionados todos aquellos realengos o montes —el viejo *empriu*— por los productos de hierbas porque se cobran. Aparecen tierras o pastos arbitrados, que al producir rentas, quedan contabilizadas como propios: Ramblar, Carmen, Torre Mendo, Torre Verde, Saurda, Murada, Esparragueral, Pujalvares, Redonda, la Asomada, Pergamisa, Balsa del Álamo, Los Negros, Hurchillo, Piñodonce. Sauridas, Soto, Yabilla, Cabeza...¹⁸. Aquellas tierras que rodeaban la vieja ciudad, que desde tiempo inmemorial habían servido de pasto a los ganados, ahora se reputaban sus productos como propios. Pero no eran comunales los pastizales, sino tierras del monarca o baldíos o tierras de nadie donde seguían acudiendo los rebaños. Es impensable que se considerasen comunales, se utilizaron —como antes en el *empriu* foral— sin entrar a discutir cuestiones sobre su propiedad: se mantenían diversos derechos dominicales sobre aquellas tierras¹⁹. Se atribuían genéricamente al monarca, como toda la ciudad —o los baldíos sin dueño, también atribuidos al rey—. En el XVIII el real patrimonio reivindicó para sí todas estas tierras, sin atención a su condición anterior: incluso las hierbas, leñas, derechos de roturar...²⁰. Otros lugares pertenecían a los señores y monasterios, a la orden militar de Montesa, pero, en todo caso, los vecinos y campesinos tenían unos derechos de aprovechamiento y lucharon por su conservación: los reivindicaron como comunales o propios... Todos serían devorados por la desamortización. En un tardío informe sobre Orihuela en 1860 se recogía la situación en que estaban aquellas tierras: los boalares se habían arrendado por orden del gobierno, las tierras de realengos ocupadas por los vecinos o vendidas en la desamortización...²¹

SANCHIS DEUSA, «La trashumancia ibéricovalenciana en la edad moderna», *Saitabi*, 40 (1990), 197-209; J. L. CASTÁN ESTEBAN, «Trashumancia aragonesa en el reino de Valencia (siglos XVI y XVII)», *Estudis. Revista de història moderna*, 20 (1994), 303-310.

¹⁷ En fecha 25 de septiembre de 1770. D-29, fols. 111r. y v.; en 112r.-113r. se duplica.

¹⁸ Archivo municipal de Orihuela. *Cuentas de propios*, años 1773 y 1780, D-1457 y 1458. Los legajos referidos a montes, D-2099, se refieren a talas de árboles de particulares; D-1932, 1, relación de ganado caballar de los vecinos.

¹⁹ En la contabilidad o los *capbreus* del patrimonio real o señoriales no aparecen registrados por entero los montes o pastos, como hemos podido comprobar en la documentación del XVIII. En algunos, no obstante, tenían tierras, F. CAPELLINO ORTS, «La propietat territorial a la Ribera a la fi del segle XVIII: el patrimoni reial», *Economia agrària i història local*, Valencia, 1981; E. y C. GARCÍA MONERRIS, «Real patrimonio y estructura de la propiedad en la baillía de Carcaixent (siglos XVIII y XIX)», *Anàlisi local i història comarcal. La Ribera del Xúquer (siglos XIV-XIX)*, Valencia, 1990, páginas 213-231. Véase también, A. MORA, «El real patrimonio de Valencia a través del cabreve de bienes de 1488», *Palau* 14, 3 (1987), 167-193.

²⁰ Véase V. BRANCHAT, *Tratado de los derechos y regalías que corresponden al real patrimonio en el reino de Valencia*, 3 vols., Valencia, 1784-1786, edición facsímil de 1990, I, págs. 207-242.

²¹ J. MILLÁN, *El poder de la tierra. La sociedad agraria del bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1890*, Alicante, 1999, págs. 18-23. Este proceso se inició en el XVIII, con roturaciones de vecinos —a partir de los levantamientos de 1766—, creación de señoríos alfonsinos o la

Las villas y pueblos señoriales, tenían un régimen semejante. El señor las había adquirido, con todas sus entradas y salidas, aguas, montes, pastos —en época medieval también los vecinos figuran en la concesión—, usualmente junto a la jurisdicción. En forma general, se concedía a los vecinos los aprovechamientos comunales, mediante pago o gratuitos, por lo que se generaban unos derechos dominicales —si se quiere, una servidumbre—. Aparecía una doble propiedad, como en la enfiteusis, otorgada por la carta de población o por contratos agrarios —si se quiere, un derecho real perpetuo sobre una propiedad nobiliaria—. La nueva planta, con la introducción de las categorías de comunales y propios cambió esta situación, pero no demasiado en la práctica. Cuando llega la revolución liberal y se impone una nueva idea de propiedad unitaria, como en la enfiteusis, se plantea quién sería el propietario. El viejo *empriu* está olvidado, las categorías que se han de utilizar ahora son propiedad, aprovechamiento o bien comunal, propios... Se han trastocado las categorías y se empieza una larga lucha por el dominio de la tierra, por decidir a quién pertenece y con qué título... ²²

Para descubrir comunales, tan sólo nos queda ya, en último término, acudir al siglo XIX, cuando se están destruyendo esas propiedades de la corona o comunales, ambos con usos colectivos, para precisar el destino que tuvieron. Es un proceso desamortizador que cabría calificar de desordenado, en que las titulaciones podrían resentirse, cambiarse, al traducir viejos derechos a una situación nueva... Se están transformando viejos derechos dominicales en una propiedad liberal. El problema se inicia con la abolición del señorío jurisdiccional por el decreto de 6 de agosto de 1811, que en su artículo 7.º negaba los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan origen jurisdiccional, como caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas y montes, quedando el libre uso de los pueblos con arreglo al derecho común... Los pueblos de Valencia alegaron entonces el aprovechamiento inmemorial, pleitearon y ocuparon, pactaron con algunos nobles, que, al fin, se vieron obligados a ceder por una cantidad alzada —los montes, como las pensiones enfiteúticas—, o perderlos sin más. El campesinado y los pueblos defendieron sus dominios útiles y los viejos aprovechamientos frente a la

colonización de las Pías fundaciones de Belluga, e incluso hubo concesiones de la bailía real, J. MILLÁN, *Rentistas y campesinos...*, págs. 85-86, 170-196, 220-225, 342-343.

²² Esa dificultad, en la época liberal y en los historiadores actuales, puede verse en C. MONTIEL, *La propiedad forestal de raigambre señorial en tierras valencianas*, Alicante, 1995, págs. 14-66, que atribuye sin más, la propiedad de los montes a los señores, las órdenes militares y al real patrimonio. D. BERNABÉ, «Bienes rústicos...», matiza mejor la condición de las tierras, sobre señoríos págs. 146-151. Puede comprobarse el derecho de los campesinos a los aprovechamientos en numerosas cartas de población, E. GUINOT, *Cartes de poblament medievals valencianes*, Valencia, 1991, o en las del XVII, tras la expulsión de los moriscos, M. GUAL CAMARENA, *Las cartas pueblas del reino de Valencia*, Valencia, 1981.

nobleza y el monarca... Porque la cuestión era quién tendría, al fin, la propiedad liberal unitaria, de entre quienes gozaban de propiedades divididas del antiguo régimen...²³. No es una mera usurpación de propiedades señoriales o reales, como se ha pretendido²⁴. Sin duda, existían tierras comunales —antiguas o formadas en el XVIII—, pero las más permanecieron como aprovechamientos derivados del *empriu*, hasta que las luchas por la nueva propiedad en el XIX, hicieron que los pueblos las reivindicaran como comunales o propios, del común de vecinos y de los ayuntamientos...

Las ordenanzas de montes de 1833 fueron la primera intervención del estado. El real decreto de 31 de mayo de 1837 establecía que la dirección general de montes nacionales y dehesas del estado ejercería también la jurisdicción sobre los comunales y propios, encargándose del nombramiento de guardas y celadores de montes. Cada provincia debía enviar una relación de los montes baldíos, realengos y de dueño no conocido, pasando todos a ser considerados bienes nacionales administrados por el gobierno²⁵. Se debía proceder en primer lugar a su deslinde. Fruto de todas estas medidas, fueron declarados del estado muchos montes de la provincia de Valencia: en Alcudia de Crespins, Ayora, Benimodo, Castelló del Duc, Bélgida, Salem, Ráfol, Canals, y Aiello de Malferit. También los de Énova, Agullent, Sellent, Llombay, Chelva, Beniatjar, Castielfabib, Castelló de Rugat, Navarrés, Venta del Moro. En otras poblaciones se pasó a nombrar guardas o celadores de montes, entendiéndose que habían sido declarados del estado como ocurre en Chera, Sot, Anna, Quesa, Tavernes de Valldigna o Bolbaite. Muchos de estos montes declarados del estado habían sido anteriormente de aprovechamiento común para los vecinos, pero sólo en algunos casos lograrían fundar su propiedad. A veces, los municipios habían concertado entre ellos el aprovechamiento común de montes. En los lugares de señorío el conflicto podía surgir con el señor, que pretende ser dueño de los terrenos comunes. Los pleitos reclamando la propiedad de los montes se sucedieron durante aquellos años: por ejemplo, el entablado por el ayun-

²³ Su estudio y de los pleitos que se produjeron, C. MONTIEL, *La propiedad forestal...*, págs. 81-148.

²⁴ A. GIL OLCINA, *La propiedad señorial en tierras valencianas*, Valencia, 1979: «Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública», *La propiedad de la tierra en España*. Aliante, 1981, págs. 11-38; C. MONTIEL, *La propiedad forestal...* Los montes predominaban en las zonas del interior, pertenecientes a los señores, frente a los realengos costeros; sin embargo, las órdenes militares también disponían de amplias zonas forestales, así como el rey: Morella, Jijona, Onteniente, Orihuela, Ademuz..., véase M. PESET, V. GRAULLERA, «Nobleza y señoríos durante el XVIII valenciano», *Estudios de historia social*, 12-13 (1980), 245-281.

²⁵ Véase el informe presentado por Gandía, en el apéndice, archivo de la diputación provincial de Valencia, *Montes*, E-4.1, caja 2, expediente 70. C. MONTIEL, *La propiedad forestal...*, págs. 88-161, donde pueden verse numerosos ejemplos de conflictos entre señores y municipios, así como las respuestas a la comisión de apeo y deslinde.

tamiento de Buñol respecto a los montes de su jurisdicción; o el iniciado por los pueblos de Jérica, Alcublas, Altura, Gátova, Puebla de san Miguel y Liria frente a la dirección general de marina²⁶. O el que enfrentó a los municipios de Quatretonda y Luchente, por el aprovechamiento de pastos y leñas pactado entre los dos municipios en 1587 y que ahora entorpecía el ayuntamiento del último²⁷. Otro ejemplo de establecimiento de un comunal por acuerdo de dos municipios fue el que convinieron los ayuntamientos de Onteniente y Benejama, por el que tenían comunes sus pastos y leña baja de sus montes —romeros, aliagas y demás—²⁸. Ejemplo de la confusión que reinaba es el caso de los montes de Mogente; el ayuntamiento reconoce en 1837, en pleno proceso de desamortización, la actual titularidad real de sus montes por descuido de la villa: «Los montes de esta villa, si bien por la escritura de población pertenecían a ella, por descuido de sus vecinos se posesionó de ellos el real patrimonio en años atrás, y por consiguiente estaban gobernados por el administrador de la bailía de Onteniente»²⁹. Montes que aparecen declarados como comunales o de propios se encuentran en Tous, Montesa, Vallada, Montichelvo, Chulilla, Cheste, Enguera, Quatretonda, Alcira, Dos Aguas, Antella, Olocau, Marines, Gátova, Liria, Benejama, Onteniente, Turís, Carcagente, Simat, Puebla de san Miguel, Corbera, o Albalat de Tarongers. En cambio, poblaciones como Valencia, Benimaclet, Moncada o Benaguacil, declararon no contar con montes nacionales, ni comunales, ni de propios. Algunos podían ser de propiedad señorial, pero también se vieron abocados a esta declaración de públicos —del estado— si los propietarios no los reclamaban...³⁰. Una vez fueron calificados como bienes del estado o de los pueblos se procedió a la desamortización por la ley Madoz del 1 de mayo de 1855.

La clasificación de los montes de 1859 y los catálogos de bienes exceptuados de la desamortización de 1862 y 1901 quisieron poner algún orden en el caos en que se movía aquel proceso³¹. Sus incoherencias son evidentes,

²⁶ Archivo de la diputación de la provincia de Valencia. *Montes*, E-4.1, caja 1, expediente 4.

²⁷ *Montes*, E-4.1, caja 1, expediente 8. El documento alude a la separación de ambas villas por privilegio de 21 de octubre de 1587, momento en que decidieron el aprovechamiento común de pastos y leñas; lo habían venido haciendo desde entonces, sin contradicción alguna durante más de doscientos años.

²⁸ *Montes*, E-4.1, caja 2, expediente 51. Véase C. MONTIEL, *La propiedad forestal...*, págs. 66-73, 164-166.

²⁹ *Montes*, E-4.1, caja 2, expediente 65.

³⁰ La reclamación del marqués de Malferit en 1848 de los montes de su propiedad que habían sido declarados montes del estado, o la del marqués de Bélgida en 1840, respecto a los montes de Sellent que habían sufrido el mismo destino, archivo de la diputación de Valencia, *Montes*, E-4.1, cajas 20 y 4. Las tierras de los monasterios habían sido desamortizadas ya. véase J. BRINES, *La desamortización de los bienes del clero en el siglo XIX. El monasterio de la Valldigna*, tesis de licenciatura, Valencia, 1969.

³¹ Véase C. MONTIEL, *Los montes de utilidad pública en la comunidad valenciana*, Madrid,

como resultado de la lucha de tres fuerzas: por un lado, los señores y el real patrimonio —las bailías— pretenderían su propiedad, basados en los viejos títulos que les concedían una población con todas sus entradas y salidas, aguas, *emprius*... De otro, los vecinos querían demostrar la propiedad, bajo las rúbricas de comunales o de propios, de sus viejos aprovechamientos. Las leyes desamortizadoras exceptuaban las dehesas boyales y los aprovechamientos comunes; la administración procuraba denegarlos, por falta de título, o porque se arrendaban, es decir, que no se hacía un aprovechamiento colectivo de los vecinos. Éstos, incluso, recurrieron a otros dos caminos: pactar la cesión con los señores, con cláusula de retro para rescindir la venta si se llevaban a pública subasta. O bien, presionar sobre las subastas para anularlas o desanimar a los postores; si no, rematarlas un grupo de vecinos, formando una junta que mantuviese los viejos usos comunales...³². Sin duda, las viejas propiedades resultaban difíciles de encajar en un molde nuevo y unitario —como ocurrió con las enfiteusis—. En tercer lugar, el nuevo estado procuraba adjudicarse los bosques o montes, cuando no estaban claros los títulos. Es un cambio de conceptos jurídicos —del *empriu* a comunales, y después a la propiedad liberal— que produce una inseguridad, una continua apelación a los tribunales; éstos debían aplicar viejos títulos de dominio y de aprovechamientos comunales, conforme juzgaban oportuno.

Por esta razón, cuando acudimos a los expedientes de la desamortización de Madoz, pocas veces se hace mención de que sean bienes comunales —en buena parte, además, exentos—, con mayor frecuencia aparecen bienes de propios. Pero, sobre todo, abundan los bienes del estado y de la corona. Luego volveremos sobre esta documentación. El nuevo estado liberal se presenta como sucesor del monarca, en montes y pastos que habían sido de aprovechamiento general, y durante el XVIII siguieron siéndolo, aunque con ingreso de sus rentas en la caja de propios. En verdad, el real patrimonio de Valencia o Cataluña constituía la vieja hacienda real a la que se superpuso la castellana, con un conjunto de diezmos, censos y monopolios, o algunas tierras como la Albufera...; se registraba en los cabreves y se administraba aparte por las bailías y los intendentes. En los años de la revolución fue reivindicado como patrimonio de la dinastía por Fernando VII y sus sucesores³³. Pero los montes realengos y baldíos —lo que quedaba de ellos— pasaron, en cambio, al patrimonio del nuevo estado liberal, si los pueblos o los señores no demostraban de algún modo su propiedad...

1995, págs. 21-71, con numerosa documentación sobre este proceso; su reflejo en el registro de la propiedad, a partir de 1861, págs. 179-203.

³² C. MONTIEL, *Los montes*..., págs. 105-118, 154-158, 172-188.

³³ Véase, E. GARCÍA MONERRIS, *El patrimonio real en el país valenciano: absolutismo y liberalismo (1833-1843)*, tesis de licenciatura inédita, Valencia, 1981; sobre su evolución posterior el prólogo de Mariano PESET a J. CORREA, *El patrimonio real*..., págs. 11-20.

III. LOS BIENES DE PROPIOS

El control real sobre estos bienes —así como sus rendimientos— permite su mayor visibilidad o constancia en la documentación: hay reglamentos de propios y arbitrios y sus resultados se reflejan en la contabilidad municipal ³⁴.

En el inicio del reinado de Carlos III se refuerza el control de las haciendas municipales, que había establecido su padre, Felipe V ³⁵. La contaduría general de propios y arbitrios, con sede en la corte y en el seno del consejo de Castilla, se regulaba por el real decreto de 30 de julio de 1760 ³⁶, para terminar con los abusos y arbitrariedades que las oligarquías municipales cometían; pretendían restaurar los patrimonios de los pueblos —de paso cargaron un dos por ciento sobre aquellas rentas, que se elevó hasta un diez—. La razón que se daba para aquel organismo era que los municipios,

...imponiendo sobre los abastos y otros géneros comerciables ciertos derechos con título de Arbitrios ... de modo que esta especie de exacción grava más que las contribuciones impuestas para sostener la causa pública... y deseando poner remedio a este daño, he resuelto que los Propios y Arbitrios, que gozan y poseen todos y cada uno de los pueblos de estos mis Reynos, corran bajo la dirección de mi Consejo de Castilla, a quien hago el más particular encargo de que tome conocimiento de los mismos Propios y Arbitrios, sus valores y cargas, para que reglado a la instrucción que acompaña los dirija, gobierne y administre, y tome las cuentas de ellos anualmente, para que constando su legítimo producto, se vea igualmente, que la inversión ha sido

³⁴ Ha utilizado los de la Nueva España, para reconstruir los patrimonios indígenas, M. MENEGUS, «Los bienes de comunidad en los pueblos de indios a fines del periodo colonial», *Agricultura mexicana, crecimiento e innovaciones en México*, México, UNAM, 1999, págs. 89-126. La colección de reglamentos de propios de los archivos centrales se quemó, por lo que hemos basado nuestro análisis en los que, de momento, hemos podido recoger.

³⁵ En 1745 se había iniciado esta intervención por el marqués de Ensenada, mediante una instrucción para crear en cada municipio juntas de arbitrios, con el fin de acabar, entre otras cosas, con la práctica de los arriendos de los tributos municipales. Al parecer no se aplicó en Valencia. E. GARCÍA MONERRIS, *La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia (1707-1800)*, Madrid, 1991, pág. 286. Sobre el reglamento de propios y arbitrios de Madrid, M. MARTÍNEZ NEIRA, *Una reforma ilustrada para Madrid. El reglamento del consejo real de 16 de marzo de 1766*, Madrid, 1994; del mismo autor, *Revolución y fiscalidad municipal. La hacienda de la villa de Madrid en el reinado de Fernando VII*, Madrid, 1995.

³⁶ Esta contaduría estaría formada por un contador general y ocho oficiales, destinándose para su mantenimiento el dos por ciento del producto total de todos los propios y arbitrios; Aragón y Valencia, así como Sevilla, Cataluña y Extremadura, eran las provincias que más aportaban, V. GIMÉNEZ CHORNET, «La comptaduría general de propis i arbitris: eficàcia d'una reforma borbònica», *Estudis*, 14 (1988), 35-49, pág. 48.

en los fines de su destino, sin extraviarlos a otros que no le son correspondientes...³⁷

Con el fin de hacer efectiva esta intervención, se crearían en los ayuntamientos juntas locales de propios y arbitrios, compuestas inicialmente por el corregidor, dos regidores comisarios, y el síndico procurador general —después, en 1767, también entraron a formar parte de la misma los diputados del común y el síndico personero—. El intendente recibiría las cuentas anuales de los pueblos de su provincia y las remitiría a la contaduría general para su definitiva aprobación³⁸. En el último eslabón —o si se mira desde otra perspectiva, en el primero—, estaba el rey, a quien se le informaría anualmente por vía reservada de hacienda, de la situación de los propios y arbitrios de cada uno de los pueblos.

Sin embargo, en Valencia se retrasó la formación de esta junta municipal de propios y arbitrios³⁹. Quizá se debió a su composición peculiar: se daba entrada a tres electos por los acreedores censalistas, con voz y voto, lo que suponía la mitad de la junta⁴⁰. Se estableció a finales de julio de 1766, todavía sin redactar su reglamento, aunque el decreto de 1760 lo requería previo a la formación de la junta municipal. Los pueblos enviarían al consejo de Castilla un informe detallado de los propios que tuvieran y los arbitrios de que usaran, así como los valores, cargas y obligaciones. Recibido este informe, el consejo redactaría un reglamento particular al que cada pueblo tendría que ajustarse en los gastos e ingresos anuales. Aunque el informe parece que comenzó a realizarse antes, no fue hasta marzo de 1762 cuando se envió a la contaduría, aprobándose definitivamente el reglamento cinco años después. En él ya se incluyen en la composición de la junta municipal a los diputados del común y al síndico personero, por resolución del consejo de 20 de noviembre de 1767, contando los primeros con voto absoluto igual que los regidores⁴¹. Por lo tanto la composición de la junta fue la siguiente: presidía

³⁷ *Novísima recopilación*, 7, 16, 12. También se analiza la legislación en L. DE DOLY y DE BASOLS, *Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado*, 9 vols., Madrid, 1800-1803, V, págs. 106-133.

³⁸ *Novísima recopilación*, 7, 16, 13, capítulos 6 y 7.

³⁹ Sobre el proceso de formación en Valencia de la junta municipal de propios y arbitrios y su retraso, E. GARCÍA MONERRIS, *La monarquía absoluta...*, págs. 296-308.

⁴⁰ V. GIMÉNEZ CHORNET, «La comptaduría general...», pág. 41. Se dio entrada en 1767 a los diputados del común, con voz y voto.

⁴¹ Al poco de crearse las figuras del diputado del común y del personero hubo una resolución expresa del consejo con fecha de 16 de septiembre de 1766 que ordenaba que los diputados del común no debían acudir a la junta de propios y arbitrios. Sí debía hacerlo el síndico personero, aunque sin voto. Se recoge esta noticia en el siguiente reglamento de propios y arbitrios de 1801, archivo municipal de Valencia, *Hacienda*, caja número I.150.

el intendente, había dos regidores ⁴², el síndico procurador general, el persouero, tres acreedores censalistas, el contador titular, el secretario y los cuatro diputados del común que se habían establecido para la ciudad de Valencia. Más tarde, por auto del intendente Francisco Xavier de Azpíroz de junio de 1797, se redujo a sólo dos diputados, para equiparar su número al de regidores, alternándose trimestralmente con los otros dos.

El reglamento de propios y arbitrios de Valencia de 1767, se mantuvo —con algunas modificaciones parciales— hasta 1801, fecha en que a instancias del síndico procurador general, Joaquín Climent, se procedió a presentar uno nuevo ⁴³. Se redactó por el contador titular del ayuntamiento, Lorenzo Muriel, aprobándose el 16 de diciembre de 1801 e imprimiéndose el 7 de enero de 1802. En ambos —siguiendo las directrices de la circular del 13 de marzo de 1764— se recoge por un lado el *cargo*, constituido por los propios, rentas y arbitrios de que se vale la ciudad para hacer frente a los gastos. Y por otro lado, la *data*, donde se distinguen diversos apartados.

Por propios se entendía en Castilla los campos, viñas y olivares que pertenecían al municipio, y se subastaban en arriendo anual; también las rentas de tiendas, alhóndigas, lonjas, almazaras, molinos, algunas dehesas y prados... ⁴⁴. Sin embargo, el ayuntamiento de Valencia —como tampoco Madrid— ⁴⁵ nunca contó con un patrimonio de este tipo, por lo que las rentas que producían estas propiedades eran de poca entidad. Por tanto, el mayor ingreso provenía de rentas —o sobreprecios, como decía Santayana— que se cobraban sobre determinados géneros: carne, sebo, cal, además de los derechos de partido y puerta...; o que se obtenían de arrendamientos sobre las carnicerías, tiendas, hornos, tablas para cortar la carne, propinas de los graduados en la universidad... Por su parte, los arbitrios eran impuestos específicamente locales que se cobraban sobre mercancías o artículos de consumo: las sisas sobre el vino, el impuesto de la nieve; o se añadían otros, como la mitad de la renta real de aduanas y el impuesto que recaía sobre la madera

⁴² En la junta de propios y sisas del ayuntamiento madrileño son cinco y no dos los regidores que forman parte de la junta, a pesar de lo que establecía la instrucción general, C. DE LA HOZ GARCÍA, «Las reformas de la hacienda en la época de Carlos III», *Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista*, Madrid, 1987, 77-101, pág. 86.

⁴³ *Reglamento que deberá observarse en la administración y distribución de los caudales de propios, rentas y arbitrios de la ciudad de Valencia*, 24 de diciembre de 1767 y *Reglamento que deberá observarse en la administración y distribución de las rentas de propios y arbitrios que disfrute la Ilustre ciudad de Valencia*, 16 de diciembre de 1801, archivo municipal, *Hacienda*, caja número 1.150.

⁴⁴ Véase L. DE SANTAYANA BUSTILLO, *Gobierno político...*, págs. 79 ss.

⁴⁵ Tampoco la corte contaba con un patrimonio concejil que le pudiera reportar grandes ingresos; sólo el 2% de los ingresos totales provenían del escaso patrimonio madrileño, insuficiente y mal gestionado, C. DE LA HOZ GARCÍA, «Las reformas de la hacienda...», pág. 94.

que bajaba por el río. Como cargas y gastos, en la *data*, estaban los salarios de empleados incluidos en el reglamento, los réditos de censos y alquileres de tablas y pilones, los gastos de festividades y otros. Si el resultado entre el *cargo* y la *data* era positivo, si había sobrante o superávit, éste se ingresaba junto con lo que se obtuviera por las multas del repeso, campo, montes y ordenanzas, penas de cámara, sobrante de la renta de aguardiente..., en depósito, en un arca de cuatro llaves ⁴⁶.

Con la nueva planta y la introducción del derecho castellano, se ha de determinar qué rentas o bienes son de propios y cuáles constituyen arbitrios; la decisión se toma en 1739, con cierta arbitrariedad, según creemos, pues hay rentas o imposiciones que se consideran de propios, o por el contrario se califican de arbitrios, sin razón evidente. Veamos cuáles eran los propios en el reglamento de 1802:

1. Derecho de partido y de puerta, o pago conforme a arancel de los pas-tos que han consumido los ganados que entran para el abastecimiento de la ciudad, salvo los meses de febrero y marzo —recuérdese el privi-legio de Jaime I—. Renta del tocino, por igual razón. Otro viejo dere-cho recae sobre la cal que entra en la ciudad. Se establecen aduanillas propias en las puertas, junto a las del ocho por ciento de equivalente ⁴⁷.
2. Derechos sobre cabezas, livianos, pies, manos y criadillas de carnero, macho cabrío y corderos; pieles de carnero, sebo de carnero y macho cabrío ⁴⁸.
3. Derechos sobre tiendas, donde se corta y vende carnero y macho cabrío, siete en la ciudad y otras cuarenta y siete en las carnicerías mayores y de la particular contribución. También tiendas en el lugar del Grao. Viejos derechos que se han calificado de propios, y que, por tanto, figuran entre éstos, aunque se parecen a otras imposiciones municipales, sisas y otros cobros...
4. Diez mil libras de derechos de puerta —del equivalente—, con obli-gación de suministrar la carne al hospital general. Cuatrocientas diez

⁴⁶ El arca se hallaba en la catedral, junto al cuarto del *magister*. Las cuatro llaves las tenían el intendente, como corregidor, el diputado más antiguo, un apoderado *acreedor* y el mayordomo, depositario como tesorero. Acerca de las cantidades que ingresa y paga el ayuntamiento, según los reglamentos y las cuentas, los propios representan un 38 y un 34,75 por ciento respectivamente del total de ingresos municipales, P. HERNANDO SERRA, *El ayuntamiento de Valencia...*, págs. 274-275.

⁴⁷ Sobre su implantación, M. PESET, «La ciudad de Valencia y los orígenes del equivalente», *Una oferta científica iushistórica internacional al Dr. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria*, edición de M. J. PELÁEZ y J. FERNÁNDEZ VILADRIKH, Barcelona, 1985, págs. 321-344; J. CORREA BALLESTER, *El impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia (1707-1740)*, Valencia, 1986; así como el reciente libro de P. GARCÍA TROBAT, citado en nota 3.

⁴⁸ Véase V. GIMÉNEZ CHORNET, *Política econòmica i hisenda...*, págs. 236 ss.

y nueve libras y media, de la misma procedencia, por censos cargados en la renta del aguardiente.

5. Un censo contra los Santos Juanes, en la herencia de Luis Funes. Otro sobre la renta del tabaco —no figuraba en 1767, procede de una casa en la parroquia de Santa Catalina, que se vendió—.
6. Grados de la universidad, en la parte que les corresponde; así como sesenta libras que paga el convento de la Merced para una cátedra que sostiene. Pero las propinas de grados se han cedido a la universidad en 1787 —por la reforma del rector Blasco—.
7. Rentas de casas varias, como son:

Fábrica de velas de sebo.

Aduana del vino.

Casa contigua a la que nació san Vicente Ferrer.

Casita y huerto en el Grao.

Atarazanas y almacenes del Grao, ocupadas por tropas y la administración de la renta de la sal.

Horno junto a la universidad.

Torre de san Felipe en la Alameda, con huertos contiguos —la de Santiago cedida para botánico de la universidad en 1798—.

Dos casas en calle del Miguelete, otras dos de los apóstoles —reedificación de la casa vestuario—.

8. Almacenes varios para el trigo, que al quedar desocupados por envío a los Silos de Burjasot, producen alquileres, como Balda y Baldeta —teatro—, y otros, Senia, Redonda, Reixetes y los Gigantes. Muchas de éstas se venderían a finales de siglo...

En todo caso los impuestos sobre vino, vinagre, y aguardiente son considerados arbitrios. Así como sobre la nieve, azúcar, cacao, «bracetes y coques d'oli», madera, aduanas, los del trigo —que se suprimen en 1707, aunque se reponen en 1721—, almacenes varios... ¿Por qué se atribuyen unos ingresos a renta de propios y otros se consideran arbitrios? Parece que los ingresos más antiguos o que derivan de instalaciones y servicios urbanos se consideraron de propios; mientras las sisas y contribuciones sobre géneros, sobre el comercio, se clasificaron como arbitrios. Se ha dicho que, cuando hubo que establecer el sistema castellano, se tomó una decisión «salomónica»⁴⁹, es

⁴⁹ V. GIMÉNEZ CHORNET. *Política econòmica i hisenda...*, pág. 233.

decir se atribuyeron a esta o la otra rúbrica según les pareció. Al comparar con otras villas o ciudades, nos damos cuenta de que no existe un criterio claro —rentas que en Valencia se consideran arbitrios, en otras fueron propios—. En muchos pueblos castellanos las huertas, viñas y olivares de propios constituían ingresos muy diferentes de estas contribuciones o repartos⁵⁰. En Valencia no existían...

IV. REGLAMENTOS DE OTRAS CIUDADES

La situación de la ciudad de Valencia se confirma en otros realengos del reino: propios son los servicios municipales que producen rentas, sin que aparezcan apenas tierras. Alcira⁵¹ presenta como tales un horno, un molino, la casa-amasijo —es decir, el producto de las instalaciones para asegurar el abasto de pan, que en el régimen foral controlaba el municipio—. Aparte cinco tabernas, cinco tiendas, tres herbacerías, que también aluden a viejos monopolios o derechos exclusivos que había tenido el ayuntamiento. Tres casitas, los réditos de censos y algunas rentas —derechos de despojo, abasto de jabón, sobrante de la renta del aguardiente...—, completaban su patrimonio de propios. Xàtiva⁵², por su lado, presentaba una fisonomía análoga, aunque los derechos eran otros, ya que no figuraban rentas derivadas de harinas y pan. Cobraba algunos derechos o rentas por carnicería y pescadería, alcabala de viento, sobrantes de la renta del aguardiente, una casa mesón en Canals, pozos de nieve en la sierra de Mariola... Numerosos réditos de censos, algunos inmuebles —casa-almacén de paja, casa sobre la puerta de San

⁵⁰ En Salamanca, por ejemplo, aparecen como propios algunos pedazos de tierra en el río Tormes, alguna dehesa, prado o el aprovechamiento de los pastos y las huertas, junto con rentas sobre algunos productos de consumo, o réditos de censos sobre oficios públicos o casas. J. INFANTE MIGUEL-MOTTA, *El municipio de Salamanca a finales del antiguo régimen. Contribución al estudio de su organización institucional*, Salamanca, 1984, el reglamento, págs. 368-392. Más claros son los reglamentos de poblaciones pequeñas como la villa de Riego o el lugar de Coomonte en la provincia de Zamora, que recogen como propios el producto de los pastos, caza, hierbas de sus montes o término, o directamente las tierras o dehesas de su propiedad. En el reglamento de la ciudad de Zamora se distinguen entre los propios de la ciudad y los propios del común, siendo en la mayor parte y en ambos casos derechos o rentas sobre productos: sólo se registra un monte y unos pozos de nieve como propios de la ciudad y el pasto de Valorio como propio del común, archivo general de Simancas, *Secretaría de hacienda*, legajo 427.

⁵¹ *Reglamento de las cargas y gastos que deberán satisfacerse de los propios y arbitrios de la villa de Alcira*, 16 de julio de 1763, archivo municipal de Alcira, *Govern. Reglaments*, 1.4.1. Suponían las rentas de propios 84.810 reales y 2 maravedises, un 41,64 por ciento del total.

⁵² *Reglamento de las cargas y gastos que se deberán satisfacer del caudal de propios y arbitrios de la ciudad de san Phelipe con consideración al producto anual que tienen y consta al consejo*, de 1770, archivo municipal de Xàtiva, *Propios y arbitrios. Cuentas*, legajo 250. Representaban los propios el 40,10 por ciento.

Jorge, otra sobre la pescadería, cuartel de la tropa...—, incluso consideraba como propio las 3/10 partes de su señorío sobre Canals...

En Villarreal⁵³, ocurre algo semejante. Sus propios son los siguientes:

1. Productos de las hierbas de su término y del boalar.
Morerales del circuito y muro de la villa, denominados portal de Valencia, Castellón y Cequiola.
2. Porción de tierra de moreras, llamado Pla del camino de Burriana —o huerto de la Virgen—.
3. Dos porciones de tierra, junto al molino de la villa.
4. Dos corrales para encierro del ganado de cerda.
5. Alhóndiga del trigo y cuatro molinos de harina —a saber, del cabo del término, el nuevo, En Llop y el citado de la villa—.
6. Casa y pilón de la carnicería y pescadería.
7. Dos panaderías y dos tabernas públicas.
8. Derecho de peso y medidas, que causan los forasteros con sus géneros vendibles.
9. Las acequias mayores para el riego de la huerta —que nada rinden a la sazón—.⁵⁴
10. Réditos al tres por ciento de 27 censos redimibles.
11. Cuatro tiendas públicas —de Valencia, del arrabal y dos en el casco—, en pleito su pago, porque denuncian que otros vecinos venden libremente sus géneros. Como también los derechos de pechar o feudo —¿enfiteúticos?— que pagan los vecinos por tierras.
12. Producto de la primicia de su término, que se gasta en el sacristán, campanero, reparación de casullas, y ornamentos del culto, sotanas y zapatos de acólitos, reparaciones del edificio, cera y aceite al santísimo de la iglesia parroquial, de que es patrona la ciudad.

Si leemos *Partidas* —el mundo castellano rural— los propios se componían de «Campos e viñas e huertas e otras heredades e ganados e siervos e

⁵³ *Reglamento de las cargas y gastos que se deberán satisfacer del caudal de propios de la villa de Villarreal, 1765*, archivo municipal, legajo 431. Agradecemos a Vicent Gil, la consulta de estos documentos. Una copia de 1812, legajo 432, señala las alteraciones: uno de los corrales se ha dado a censo; no existe pescadería, sólo dos pilones de carnicería; sigue el pleito de pechas o feudo; han cambiado los censalistas —da lista de ellos—.

⁵⁴ I. C. ROMÁN MILLÁN, *El regadío de Vila-Real durante los siglos XIII-XV*, Villarreal, 1999, muestra un sistema de riegos controlado por el municipio.

otras cosas semejantes que dan frutos de sí o renta pueden aver las Cidades o las villas, e como quier que sean comunalmente de todos los moradores de la Cibdad e Villa, cuyos fueren, con todo esso non puede cada uno por sí apartadamente usar de tales cosas como éstas; mas los frutos e las rentas que salieren de ellas, deven ser metidas en pro comunal de toda la Cibdad e Villa...» (3, 29, 7). Nada semejante existe en las ciudades valencianas. Santayana nos proporciona una visión que corresponde mejor a lo que observamos en las poblaciones del Mediterráneo, en que aparecen censos, unas casas, unos derechos sobre la ciudad y, sobre todo, viejos impuestos o transferencias del equivalente o de la renta del aguardiente, desde la corona a la ciudad... Santayana decía que el patrimonio o dote de los pueblos —los bienes de propios— están formados por «lonjas y suelos que tienen sus plazas y mercados, porque, por la facultad de vender en ellos suelen pagar a las ciudades y pueblos algunos impuestos los tratantes. Pero a más de esto, suelen tener los pueblos heredamientos propios particulares de molinos, campos, viñas, casas, treudos, censos y otros derechos. El sobreprecio de la carne en los más de los pueblos sirve de patrimonio para los mismos. En muchos, principalmente en Aragón, los arbitrios o sobreprecio de los abastecimientos han servido y aún sirven en parte, de patrimonio de los pueblos»⁵⁵.

En Orihuela encontramos un perfil análogo de los bienes de propios. Había sido un municipio diligente, ya que su primer reglamento de propios y arbitrios —aunque no lo hemos hallado— era, al parecer, de 1747, en la primera etapa de control de Felipe V⁵⁶. En 1768 el coronel y gobernador Felipe Caballero les insta a redactar otro, pues han cambiado las circunstancias, y a formar la junta correspondiente, para la que se nombran dos regidores, acordando reunirse todos los jueves. Nombran mayordomo o depositario por orden del rey, ya que era un oficio enajenado desde muchos años antes. En sus sesiones se aprueban las condiciones y fianzas para el arrendamiento de los diversos servicios, o se autorizan gastos, libranzas y reparaciones... El intendente insiste con frecuencia en que se presenten las cuentas, y se pague el dos por ciento para sostenimiento de la contaduría de propios del consejo; luego, a partir de 1777, es un ocho por ciento, y desde 1794 el diez por ciento para atender a los vales reales...⁵⁷

Si analizamos sus cuentas de propios y arbitrios —con diferentes calas en varios años—, llegamos a la conclusión de que se limitaron a denominar sus

⁵⁵ L. SANTAYANA Y BUSTILLO, *Gobierno político...*, pág. 79. Califica estos ingresos de propios, en contraposición a una legislación castellana que respondía a un mundo diferente.

⁵⁶ Archivo municipal de Orihuela, *Libros de juntas de propios y arbitrios*, D-27, se encuentra impresa la orden de Ensenada de 3 de febrero de 1745, fols. 70r.-79r.

⁵⁷ *Novísima recopilación*. 7. 16. 52. Menos conocido es que desde 1772 se exigió un tres y desde 1777 un ocho por ciento, D-2188, 62; D-2189, 21.

viejas rentas forales como propios y arbitrios, casi sin modificación. Hemos visto cuentas de finales del xvii, y nos parece evidente que la vieja administración foral se transformó, sin más, en propios y arbitrios. Existía una caja o clavería para la administración de sus diversos ingresos y gastos —como en el ayuntamiento foral de la ciudad de Valencia— y siguieron utilizando las mismas rentas e ingresos de Orihuela y sus aldeas⁵⁸.

Veamos los propios que tenía Orihuela según su reglamento y libros de cuentas⁵⁹:

1. Dos molinos harineros arrendados. Uno, según el reglamento, situado en la ribera del río Segura.
2. Cuatro casas y derechos sobre pescado.
3. Peso y romana.
4. Renta sobre vino.
5. Derechos sobre las aguas saladas.
6. Corredurías.
7. Rentas sobre el jabón.
8. Rentas de la sosa y la barrilla.
9. Censos y debitorios a favor de la ciudad.
10. Hierbas del monte.
11. Por cabezas de ganado en los realengos.

Por tanto, a través de estas precisiones acerca de propios en el reino de Valencia, confirmamos nuestra idea: la aplicación de la legislación castellana cambió la forma de gestionar y administrar, pero los ingresos fueron semejantes a la época foral. No aparecen bienes de propios análogos a los del mundo rural castellano.

⁵⁸ Incluso para las cuentas antiguas, algún mayordomo del xviii las encuadernó o agrupó como cuentas de propios y arbitrios, véase el legajo D-1417, cuentas de 1664, 1665 y siguientes. Hemos visto las de 1695 y 1708, D-1420 y 1421 para esta comprobación.

⁵⁹ *Reglamento de las cargas y gastos que se deberán satisfacer del caudal de propios de la ciudad de Orihuela*, 24 de diciembre de 1767, archivo histórico de Orihuela, D-268, 1. El reglamento suprime como propios el producto que se obtenía de las hierbas de La Redonda y el derecho de la molienda sobre un molino harinero, por ser muy gravosos y no necesarios. Véanse *Cuentas de propios y arbitrios*, 1760-1773, y 1774-1781, D-1457 y 1458. En todo caso, a partir de 1773 los realengos empiezan a producir cantidades más elevadas, como ya dijimos.

V. EXPEDIENTES DE DESAMORTIZACIÓN

Nos servirán también, para completar nuestra presentación de comunales y propios en Valencia. Carlos III, en su deseo de resolver el problema de la tierra, ordenó que se repartiesen propios en arrendamiento, primero en Extremadura, después, en toda la península ⁶⁰. Fue el primer ataque a los propios, así como a los comunes arbitrados —es decir, aquellos que se explotaban mediante arriendos u otros contratos, sin que fueran de aprovechamiento común—. Es la primera vez que se inicia una política contraria a estos viejos patrimonios. En Morella y ciudades de alrededor, un pleito nos permite conocer un caso de reparto ⁶¹. Existía en aquella ciudad la extensa dehesa de Vallivana y Salvassòria, procedente de una donación de 1241. En el siglo xvii, al separarse las aldeas, se llega a una concordia para uso comunal de todos. Con los repartos de Carlos III de propios y comunales arbitrados, Morella se apresta a realizarlo, con la oposición de las aldeas que sostienen que está fuera de estos supuestos, que es comunal, de aprovechamiento colectivo...

Pero la ley Madoz en 1855 realiza enajenaciones de los comunales y propios. Los bienes de los pueblos se subastarían —salvo aquéllos destinados al servicio público—, y el 20 por ciento de su precio sería para el estado. El otro 80 quedaba para los ayuntamientos, convertido en deuda pública al 3 por cien. Luego se determinó que ese 80 por ciento se distribuyera en una tercera parte que quedaría en la caja general de depósitos, devengando un 4 por ciento a favor de los ayuntamientos, y las otras dos terceras partes se transformarían en deuda. Con estas rentas pensaron que los pueblos podrían seguir funcionando, pagando contribuciones estatales incluso. Se podía pedir la devolución de la caja, siempre que se justificase la necesidad o conveniencia de hacer obras públicas. También podrían salvar de la enajenación los bienes de aprovechamiento común, siempre que los ayuntamientos lo justificasen; incluso se declaró que quedasen fuera las dehesas boyales de los pueblos y los aprovechamientos comunales. Pero a veces, cuando consiguieron algunas dehesas las arrendaban para hacer frente a gastos municipales, con lo que pasaban a desamortizar ⁶². En general, todo fue devorado por el estado y comprado por quienes tenían dinero...

⁶⁰ *Novísima recopilación*, 7, 25, 18, real provisión de 26 de mayo de 1770, que unifica legislación anterior, desde 1767, citada en nota 11 de esta ley; también las leyes siguientes de Carlos IV. Los sobrantes de propios y arbitrios quedarían ocho años en la caja de amortización de vales reales en depósito, a menos que hubiese hambre u otra plaga por cédula de 29 de mayo de 1792 y después en 16 de enero de 1794 se les cargó con un diez por ciento del total de ingresos, 7, 16, 20 y 52.

⁶¹ Archivo histórico nacional, *Consejos*, legajo 22.731. Agradecemos otra vez a Vicent Gil por la información sobre este documento, estudiado por F. TORRES FAUS, «Un plet per la propietat...», citado en nuestra nota primera.

⁶² Artículos 1 y 2 de la ley de 1855; 10, 12 y 13 de 11 de julio de 1856, sobre posibles excepciones; las dehesas en art. 1 de la circular de 2 de octubre de 1862, y reales decretos de 10 de julio

La realidad modificó las intenciones legales. En primer lugar, quizá los pueblos no se preocuparon bastante de solicitar que determinados bienes —como dehesas de pastos— quedasen sin desamortizar en beneficio del común, de manera que, salvo las calles y plazas y el edificio municipal, buena parte de sus bienes fueron objeto de venta; tampoco las autoridades accedieron con facilidad a declararlos exentos⁶³. Después, la deuda no se pagó a tiempo y se devaluó progresivamente, con lo que quedaron dependiendo de contribuciones o impuestos municipales... Cuando quisieron disponer para obras de las cantidades depositadas en la caja general de depósitos, no se les autorizó o tardaron en hacerlo, pues el estado sufría graves urgencias financieras⁶⁴. Esto resultaría grave para los establecimientos de instrucción y beneficencia municipales, que se vieron sin medios para hacer frente a sus cometidos.

Pero nos interesa ahora ver si a través de la documentación desamortizadora podemos calibrar la existencia y valor de comunales y propios en el reino. Azagra, a través del resumen de sus ventas entre 1855 y 1856, indica que sólo representaban un ocho o diez por ciento de los valores desamortizados. Es poco, son escasos los bienes, lo que parece confirmar nuestras conclusiones: escasos comunales, pocas tierras de propios. Pero, como bienes del estado se estaban desamortizando los montes en beneficio de una clase, con una idea nueva de propiedad... En los años anteriores, los municipios procuraron que los montes y tierras, que habían compartido mediante la vieja institución del *empriu* con los reyes y señores, fueran declarados del común, consiguiendo en muchos casos que se reconociese el aprovechamiento inmemorial, frente a al derecho de aquéllos. Pero después, sólo se exceptuaron dehesas para el ganado y determinadas especies arbóreas, en fincas de una cierta dimensión... Aunque habían sido calificados de comunales, muchos fueron vendidos en las subastas, junto a aquellos que el nuevo estado había decidido que fueran suyos —un estado que no existía en el antiguo régimen—.

de 1865 y 23 de agosto de 1868 —nuevo plazo—, real orden de 13 de septiembre de 1866; pero si se arrendaban, pasaban a ser desamortizadas según orden de 28 de febrero de 1869, pero se admitió por real orden de 16 de mayo de 1877; nuevo plazo para solicitar la excepción de dehesas y aprovechamientos comunales por decretos de 30 de noviembre de 1870 y 8 de febrero y 4 de marzo de 1871. Hay una amplia regulación tardía por ley de 8 de mayo de 1888. La dehesa de los Carabanchales de Madrid fue exceptuada por ley de 21 de diciembre de 1855.

⁶³ Véase I. IRIARTE, *Bienes comunales y capitalismo agrario en Navarra*, Madrid, 1996, analiza la distinta solución en Navarra, que conservó mejor sus comunales. Hacia fin de siglo se promovió una doctrina a favor de los comunales, como medio de explotación de la tierra, encabezada por Joaquín Costa, Gumersindo de Azcárate, Cárdenas y Altamira, mientras se estaban liquidando los que quedaban.

⁶⁴ Artículo 19 de la ley de 1855, ley de 1 de abril de 1859.

En todo caso, si acudimos a los expedientes de subastas tenemos esa misma impresión. Las ventas de comunales no son frecuentes, en cambio aparecen propios: casas, molinos, alhóndigas, y también algunas tierras de distinta calidad, así como algunos montes. Pero, sobre todo, los montes aparecen como bienes del estado o de la corona —sólo por excepción algún mostrenco—⁶⁵.

En resumen, para terminar podemos establecer algunas líneas en nuestra investigación sobre comunales y propios en la ciudad y reino de Valencia:

1. En Valencia ciudad no existen montes, dehesas, ejidos..., sino más bien son las calles y el ayuntamiento, prisiones, edificios e instalaciones para su abastecimiento, hacienda y mercados... La hipótesis que planteamos es que se debe a las circunstancias de su reconquista, en la que no se expulsa a los moros de la tierras llanas del regadío costero... Las funciones de los comunales —pastos, riegos, pesca...— se alcanzan con otros mecanismos jurídicos, diferentes a Castilla y Andalucía: el *empriu* sobre los pastos del reino. Los montes y pastizales, en su mayoría, pertenecían al monarca, o a los señores y monasterios, pudiendo ser aprovechados por los vecinos del término o de otros. En el XVIII, cuando se aplica el derecho castellano continúan con su utilización o los arbitran —en Orihuela—, pasando a propios sus rendimientos, pero su titularidad no se discute.
2. Cuando llega el liberalismo se reivindican como bienes del estado —que no existía antes—, pues, sin duda, por falta de título o registro se consideran baldíos o mostrencos. El real patrimonio no registraba los montes y realengos que pertenecían a una ciudad o pueblo del rey. Tampoco los cabreves señoriales, que se limitan a las enfiteusis de los campesinos o terratenientes; su dominio sobre montes y pastos usualmente sólo se apoyaba en el título primitivo que sobre una población tenían.

El poder público realiza una operación sustanciosa. Los bienes que figuraban en el real patrimonio pasaron, como los palacios, a ser patrimonio de la dinastía. Los colectivos de los pueblos y baldíos, en cambio, se atribuyeron con frecuencia al estado, si nadie podía reivindicar

⁶⁵ Véase en el archivo del reino de Valencia, *Propiedades antiguas*, ventas de propios, libro 51 y ventas de fincas del estado, 52; también salinas y la dehesa de la Albufera, que se suspende por la dirección general en 19 de agosto de 1874. Las murallas de Xàtiva se atribuyen al «ramo de guerra». Hemos inventariado también los legajos 255, 256, 270 y 290, para confirmar nuestras ideas; en todo caso, una revisión de la desamortización requeriría un esfuerzo que sobrepasa nuestra intención.

su título, o si estaban administrados por la corona. Los que, al fin, son de los pueblos —salvo excepciones— se venden con un veinte por cien a favor del estado, y el resto se reconoce a los ayuntamientos, en deuda pública o depósitos, aunque ya sabemos cuál será su destino final...

3. Los bienes de propios en Valencia tampoco son viñas y olivares, ni huertas. Cuando se introduce a principios del XVIII esta distinción —que no existía en el derecho foral— las viejas rentas que tenían los municipios se clasifican —algo arbitrariamente— entre propios y arbitrios. Son restos de derechos exclusivos que otras veces tenían los reyes y los señores —hornos, molinos, almazaras, tiendas, carnicerías...—. Incluso viejos o nuevos impuestos que, en una conceptualización más estricta hubieran debido ser clasificados como arbitrios... Viejos derechos sobre las carnes, cesión de una parte del equivalente... En algún lugar como Villarreal, las acequias o riego, que desde siglos controlaba el municipio. En todo caso, puede afirmarse que hubo una forzada asimilación, como ocurrió también con la alcabala, que se cobró con un reparto equivalente...
4. Cuando llega la abolición de las jurisdicciones en 1811 o la desamortización de 1855, los pueblos del reino reivindican como comunales o propios los aprovechamientos que habían tenido durante siglos. Además, con cierto éxito, pues los viejos títulos feudales de donación o compra de un lugar tenían bastantes visos de jurisdicción. La posesión de aprovechamientos comunes les sirvió en los tribunales, ante la administración, aunque se perdieron muchos a lo largo del siglo...

Es evidente que el estudio de los comunales en Valencia—a partir del XVIII se introduce la distribución entre comunales y propios— se encuentra rezagado, a diferencia de Castilla y otros territorios, aunque hay algunas valiosas aportaciones. Creemos que con estas páginas centramos sus problemas para un análisis futuro acerca de su existencia, formas o tipos, su desamortización... Hemos visto, sin duda, cómo las categorías jurídicas pueden cambiar en la lucha por la tierra: el viejo *empriu* desapareció con la legislación foral, pero no hubo una adaptación rápida a las nuevas categorías de comunales y propios hasta que la abolición de señoríos y la posterior desamortización de los bienes de los pueblos exigió una defensa contra las pretensiones señoriales de propiedad y la voracidad del estado liberal. Se desencadenan unas pugnas, mediante diferentes argumentos jurídicos para salvarlos. Y las categorías de comunales y propios pasan a primer plano, ya que en ellas se basaba la intervención del estado y la legislación

desamortizadora, que tan sólo salvaba las dehesas boyales y los aprovechamientos comunales. Se recurrió a la posesión inmemorial de los aprovechamientos, a su inscripción en el registro de la propiedad, a acuerdos con los señores —compras o transacciones—, a comprar el común de vecinos las fincas, creando juntas u otros organismos para su administración... Sorprende que viejas situaciones feudales de Valencia —enfiteusis y aprovechamientos comunales— depararan algunas ventajas a los pueblos del reino. Pero no se trata de un mero juego o contraste de categorías jurídicas, sino de la resistencia de los enfiteutas —campesinos y labradores ricos— que lucharon por la tierra...

El estado respondió denegando su carácter de comunal —o enajenó los comunales si se arbitraban o arrendaban, mientras ordenaba que se desamortizasen los propios —, o subastó sin hacer caso de las protestas y títulos esgrimidos. Después, aunque reconoció un ochenta por cien de su valor a favor del municipio, tampoco cumplió... Fue el mayor trasvase de derechos dominicales o propiedades de nuestra historia reciente, junto a la desamortización eclesiástica...

Ejemplo de informe presentado por el término de Gandía

Población	Monte	Propietario	Jurisdicción	Extensión
Gandía	ø			
Alquería de la Condesa	ø			
Almoynes	ø			
Alfuir	Castillo de Palma	Cobes de Cosín	Particulares	50 jornales
Almisera	La Cruz o Castillo	Común de Vecinos	Llutxent	250.000-300.000 fanegas
Bellreguart	ø			
Beniflá	ø			
Beniarjó	ø			
Benicolet	Blanco	Marqués de dos aguas	Benicolet	600 fanegas
Benirredrá	ø			
Benipercar	ø			
Beniopa	ø			
Castellonet	Encina del Torrós	Común de vecinos	Villalonga	300.000-400.000 fanegas
Daimuz	ø			
Guardamar	ø			
Xeresa	ø			
Xeraco	ø			
Lugar nuevo S. Jerónimo	La Gruta	Común de vecinos	Terrateig	350.000-400.000 fanegas

Población	Monte	Propietario	Jurisdicción	Extensión
Luchente	Común	Común de Llutxent, Quatretonda, Pinet y Benicolet	Llutxent	3 horas N/S 6 horas L/P
Miramar	∅			
Montichelvo	Planisa	Nación	Montichelvo	40 hanegadas
Piles	∅			
Palmera	∅			
Pinet	∅			
Palma y Aior	∅			
Rótova	Castillo del Blanco, Font Llibrells, Barranco, Garrofera, Barranco Puig	Los barrancos, particulares, El baldío, común	Rótova	+2.000 jornales 1.000 inculto
Real de Gandía	∅			
Terrateig	Peñalonga, Olivera del Silvestre	Común de vecinos	Lugar nuevo de S. Jerónimo	400.000-450.000 fanegas

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Valencia, Montes, E-4.1, caja 2, expediente 70.